

El congreso de Responsabilidad Social de Zaragoza impulsa la agenda 2030 de la ONU

● Empresarios «activistas» defienden los objetivos de desarrollo sostenible para crear sociedades más sanas

ZARAGOZA. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) ha dejado atrás ya la etapa en la que se cuestionaba si se trataba de una moda que había que quedar bien a empresas o instituciones para apoyarse en 17 retos concretos en los que hay que trabajar. Son los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU aprobada en 2015, que insisten, en todo caso, en afrontar los retos de una sociedad que ha de ser más inclusiva, que debe tener más en cuenta a las personas y que debe apostar por organizaciones más comprometidas en el respeto al

medio ambiente y en la igualdad de oportunidades.

De todo esto se habló ayer en la primera de las dos jornadas del 6º congreso nacional de Responsabilidad Social que tiene lugar en Zaragoza. Un evento que ya es en sí mismo, como destacó Cristina Monge, directora de Conversacio-

nes de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), «un ejemplo de la agenda 2030», tanto por la participación institucional y de empresas como por la presencia de expertos e, incluso, con la alegría que transmitió la actuación del coro inclusivo Cantatutti de la Universidad de Zaragoza antes de comenzar los debates.

La primera de las mesas redondas tuvo un contenido marcadamente empresarial, con ponentes que se declararon abiertamente «activistas» en la defensa de los ODS de la ONU. Clara Arpa, consejera delegada de la empresa aragonesa Arpa Equipos Móviles de Campaña y miembro de la Junta del Pacto Global de Naciones Unidas, destacó la importancia de que las compañías se involucren de lleno en afrontar los retos que exige la sociedad hoy. Desafíos que Francisco Román, expresidente de Vodafone España y presidente de la Fundación Seres, acotó en el reto medioambiental derivado del cambio climático y en las consecuencias de la implantación generalizada de nuevas tecnologías en nuestra vida diaria. Arpa insistió en que las pymes pueden trabajar en estos ámbitos promoviendo una cultura interna en la que ella destacó su papel como una «hippie activista» en la materia. Josep Santacreu, consejero delegado de DKV, se reconoció también como activista al señalar que su grupo fue uno de los primeros en el mundo que vio evidente el impacto en el hombre del calentamiento global y expresó su preocupación por el aumento de la brecha entre ricos y pobres, una realidad a la que, dijo, «hay que dar respuesta desde las empresas». Francisco Mesonero, director general de la Fundación & RSE Adecco Iberia, coincidió con ellos y valoró la popularización de la ODS, «que se han convertido en un lenguaje común útil para todos».

Todos coincidieron que al igual que en la gestión empresarial con los resultados, en la RSE —que también ha de ser medible— debe mandar la visión a largo plazo.

El congreso reúne durante dos días a expertos en responsabilidad social y analiza los retos de las administraciones públicas, el tercer sector, la postverdad, la ética y responsabilidad social en la cuarta revolución industrial, entre otros.

LUIS H. MENÉNDEZ



Francisco Román, Josep Santacreu, Cristina Monge, Clara Arpa y Francisco Mesonero, ayer. RAQUEL LABODÍA

Más transparencia, pero muchos fallos a lo largo de los años

Teresa Fogelberg, experta de la organización GRI, que elabora informes de sostenibilidad, destacó ayer en la conferencia inaugural del congreso la «gran ola de transparencia» que se ha ido extendiendo por todo el mundo y que ha hecho que la responsabilidad social se ponga «en el nivel más alto político», ahora con

los 17 objetivos para el desarrollo (ODS) planteados por Naciones Unidas para 2030.

Sin embargo, durante su ponencia también enumeró los fallos que se han producido en la materia, como el que haya sido utilizada como «herramienta de marketing» por algunos países y empresas, la baja calidad de al-

gunos informes y la «caridad» poco transparente de algunas empresas defraudadoras de impuestos. Entre las amenazas actuales señaló las guerras comerciales, la ruptura de la UE con el «brexit», la salida de varios países de los acuerdos de la Cumbre de París y la llegada de líderes nacionales «poco éticos». **B. A.**

Otra sentencia considera autónomos a los 'riders' de Glovo

ZARAGOZA. Los repartidores de Glovo sí son autónomos. Así lo ha resuelto ahora el juzgado de lo Social número 17 de Madrid, cuatro meses después de que otro tribunal de la capital del país validara asimismo el modelo de negocio de la firma con los denominados 'riders'. El fallo a favor de la empresa de comida a domicilio, nacido de una denuncia por despido improcedente de un empleado, no ha sido bien recibido en sindicatos como UGT, que

sostiene que «todavía quedan abiertos otros muchos escenarios judiciales».

El texto dado a conocer ayer refleja que «a la vista de cómo se llevó a cabo la prestación de servicios, se puede decir que efectivamente se trata de una relación de autónomo económicamente dependiente». Pero el secretario de política sindical de UGT Aragón, José de las Morenas, no se retracta: «hablamos de falsos autónomos». De las Morenas re-

cuerda además la intervención de Inspección de Trabajo en Zaragoza, que obligó a la firma el año pasado a dar de alta a más de tres centenares de 'riders' en el régimen general de la Seguridad Social; una resolución todavía pendiente, puesto que fue recurrida por la compañía.

La sentencia detalla que «el profesional tiene total libertad, en sentido amplio, para aceptar o rechazar la realización de un servicio. También para conectarse

no a la 'app', a través de la cual recibe la notificación de entrada de solicitud de un servicio». Además, insiste en que «no está sometido al poder disciplinario ni organizativo de la empresa», algo en lo que el sindicalista difiere. «Está más cerca del beneficio de la firma que de la realidad de los 'riders'», lamentó De las Morenas.

El texto deja claro que el 'glover' «no queda sujeto a ningún régimen de exclusividad». E in-

LABORAL

Vodafone reduce en 75 los afectados por el despido colectivo

Vodafone España presentó ayer una nueva propuesta a los representantes de los trabajadores en la mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la que reduce en 75 los afectados por el despido colectivo, desde los 1.198 iniciales a 1.123. Además, acepta voluntariedad hasta un máximo del 25% del total y eleva la indemnización a 45/33 días por año trabajado, entre otras medidas.

Caixa Bank ofrece en su ERE 33 días por año hasta 24 meses

La dirección de Caixa Bank comunicó ayer a los representantes de los trabajadores las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.157 empleados, en las que se ofrece una indemnización de hasta 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades a los menores de 53 años, según sindicatos. El banco, que no descarta despidos forzados, pretende una reducción del 18% de la red de oficinas, que afectará a 2.157 empleados.

TRANSPORTE

Millonario sobrecoste en la integración del AVE en las ciudades

Los proyectos que se lanzaron hace casi veinte años para reordenar y soterrar las líneas de tren en trece capitales aprovechando la llegada del AVE acumulan un sobrecoste conjunto de 7.637 millones de euros y, además, ninguno de ellos ha logrado aún completarse, según revela un informe del Tribunal de cuentas. El importe total necesario para terminar todos estos proyectos asciende a 11.740 millones de euros, un coste que triplica así al de 4.101 millones inicialmente calculado, según el estudio, con datos de cierre de 2016.

JORGE NÚÑEZ